

Grietas de la democracia

ORLANDO FALS BORDA

La participación popular en Colombia

A raíz de la discusión sobre calidad y peligros de la democracia en América durante el taller Centro Norte-Sur / IEPRI del año pasado, tengo entendido que hubo consenso en examinar más a fondo lo que se identificó como *fallas, fracturas, grietas o fault jines* en el gobierno democrático.

No hubo acuerdo sobre el sentido concreto del concepto de *grietas o fallas*, porque algunos argumentaron que esta metáfora geológica denotaba procesos involuntarios, abruptos y/o violentos, mientras que se observaba en cambio un proceso prolongado y más bien corrosivo de las estructuras sociopolíticas existentes.

Estas conclusiones me llamaron la atención, porque hace treinta años los tres autores del libro *La Violencia en Colombia* identificamos este doloroso proceso precisamente como una "suma de agrietamientos" o fallas en la estructura de la sociedad, incluyendo lo civil, lo religioso, lo cultural, lo económico y lo militar¹¹.

El fenómeno que acabábamos de analizar en 1962 nos pareció una catástrofe de tal magnitud que el colapso del Estado y la crisis nacional sólo eran comparables a grandes desprendimientos geológicos. Estos desprendimientos, muchas veces impulsados desde la cúpula de un gobierno central que todavía se consideraba a sí mismo como

"democrático", no podían ser, en efecto, sino abruptos y violentos. Pero también mostraban ciertos efectos evolutivos o adaptables.

Un concepto tan sugerente como este de la grieta estructural, que en la práctica podría sustentarse con la experiencia histórica colombiana, vale la pena elaborarlo. Para ello he querido referirme en primer lugar a las conclusiones pertinentes de nuestro libro de 1962 y luego, a partir de estas, recordar sucintamente algunas reparaciones locativas que se han dado aquí, hasta llegar a la especie de democracia de participación que estamos tratando de construir desde 1991.

LAS GRIETAS VISTAS EN 1962

Los autores interpretamos el origen de la Violencia en Colombia como una acumulación de conflictos inducidos por divergencias entre normas ideales y normas reales en las instituciones sociales fundamentales. Este proceso pasó por varios niveles de descomposición: del gubernamental central al regional, de este al comunitario, al vecinal y al familiar hasta llegar al diádico, produciendo lo que Gregory Bateson había identificado como *cismogénesis*, es decir, tendencias a disyunciones socioculturales aleatorias¹².

ORLANDO FALS BORDA
sociólogo,
profesor del
Instituto de
Estudios Políticos
y Relaciones
Internacionales.

¹¹ Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, *La Violencia en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional (Sociología), Tomo I, julio 1962, pp. 366-381. El concepto de *grieta o fractura* encontró apoyo teórico posterior en el análisis de Gino Germani, *Política y sociedad en una época de transición* (Buenos Aires, Paidós, diciembre 1962, pp. 35-36), donde se refiere a subdesarrollos relativos, economías duales y "los dos Brasiles" de Jacques Lambert.

¹² Gregory Bateson, *Naven*, Stanford University Press, 1958, pp. 171-197.

El proceso cismogenético fue produciendo diversas grietas o *cleavages*, para dejar al descubierto "puntos débiles de la estructura social colombiana: la impunidad, la falta de tierras, la pobreza, la rigidez y el fanatismo" (p. 367).

La Violencia se inicia como una expresión de lucha política por el poder formal del Estado en sus más altas esferas. De allí corre cuesta abajo como bola de nieve, agrandándose con las masas flojas de la pendiente. Sus efectos fueron imprevistos mas no totalmente involuntarios: el propósito político era claro para los instigadores, pero las consecuencias se les fueron saliendo de cauce. El conflicto se fue convirtiendo de dirigido o "telético" en pleno o "de aniquilación". Para ello se empleó la coerción condonada por el gobierno a través de sus fuerzas de policía ("chulavitas"). Fue lo que en aquel momento se llamó "la crisis moral del país".

El nadir de esta primera etapa de agrietamiento estructural ocurrió entre 1951 y 1952 cuando en respuesta al gobierno se crearon guerrillas, comandos autónomos rurales y "republicuetas". En estas entidades territoriales fuera de serie no se llegó a perder la conciencia de pertenecer a la nación colombiana: pero se desconoció al Estado, divorciándolo de la idea de patria. Esta imagen se redujo a la de la "patria chica" o "terruño" (p. 373).

Según el estudio de 1962,

atacada la base del consenso valorativo del sistema social más amplio e incluyente que era la Nación, quedó amenazado el equilibrio de esta. Sin embargo, el conflicto subsiguiente no fue la mayor amenaza para el equilibrio y solidez de aquella estructura: fue la intolerancia y rigidez misma de ella su mayor peligro, puesto que permitió la acumulación y canalización de los sentimientos de agresión u hostilidad del individuo colombiano hacia las líneas verticales de ruptura que ya se habían dibujado. Esas grietas estructurales en Colombia eran políticas, económicas y religiosas, y por ellas se advertían las disparidades entre las normas ideales y las reales y los cambios en la concepción de la línea de poder de los intereses creados. Por esas grietas se canalizó la acción del conflicto hasta constituirse en Violencia (p. 376).

Uno de los desarrollos imprevistos de la Violencia analizada en 1962 fue la forma como cierto orden surgió espontáneamente de cada agrietamiento. La confusión inicial dio paso a la organización de grupos perseguidos que desarrollaron sus propios códigos,

"leyes", símbolos y valores, llegando incluso a establecer asambleas, juicios y colonias penales. Aunque el conflicto en sí mismo pareciera informe, la Violencia no resultó caótica. En lo económico, por ejemplo, impulsó el progreso de determinadas capas sociales y la sustitución de unos grupos productivos por otros. No obstante, la subversión de hecho así fomentada hizo que los instigadores originales de la Violencia fueran víctimas de su propio invento: resultaron patéticos aprendices de brujo.

Esta situación subversiva organizada -no caótica- quedó todavía más clara cuando se aplicó más tarde (1974) el Pacto de Chicoral por los terratenientes: en efecto, aunque estos lograron desarticular el movimiento campesino como lo querían, empeoraron la situación rural, avivando las guerrillas. Pocos fueron los dueños de fincas que pudieron regresar a sus propiedades, pero estas siguieron en buena producción. En esta forma la fractura del sector rural siguió cuesta abajo.

LA REPARACION DE LAS GRIETAS

La cadena de *vendettas* instaurada a raíz del conflicto anterior hizo que los autores del libro sobre la Violencia estimáramos que Colombia seguiría siendo víctima de ella por una generación por lo menos, es decir, por treinta años más, si no se aplicaban soluciones de fondo. Y nos preguntamos: ¿Podrá soportarlo el cuerpo nacional? (p. 381).

Han pasado ya estos treinta años y es evidente que el cuerpo de la nación colombiana soportó la catástrofe, aunque sin resolver los problemas fundamentales de origen. El país, en esta época de turbulencias, logró no sólo modernizarse y desarrollar formas eficaces, aunque ambiguas, de acumulación capitalista, sino que demostró tener una gigantesca capacidad de supervivencia o "aguante" así como de creación. Es significativo que, entre otras muestras positivas, Colombia hubiera tenido en estas décadas trágicas la más alta producción literaria, científica, artística y deportiva de toda su historia, con reconocimiento universal. Demostró tener reservas de humanidad y altruismo que equilibraron en mucho las horribles tendencias a la "tanatomanía" señaladas por los autores del libro de 1962. Y, formalmente, el país continuó siendo una "democracia".

¿Qué pasó entonces con los agrietamientos estructurales observados en 1962? En general, éstos

pueden interpretarse con otros símiles. Hubo períodos de acomodación de rocas y cantos rodados en cada uno de los barrancos producidos. Pero cada esfuerzo de arreglo representó aceptar el derrumbe parcial e involuntario de alguna práctica social o política, de algún valor o creencia. Ningún sector pasó la prueba incólume: hubo pérdida de presencia, y disminución de eficacia, desmoralización, falta de nortes.

De esta manera, el teórico podría sostener ahora que, en los treinta años transcurridos, se combinó la posibilidad del agrietamiento (*fault line o cleavage*) con la de la nivelación y corrosión de estructuras, quizás en secuencias. Y que este ritmo de reparaciones estructurales parciales se ha venido cumpliendo hasta la fecha febrilmente, sin que se vea aún ningún término: parece que nos seguimos hundiendo y recomponiendo *ad infinitum*.

En efecto, un primer intento importante de reparación estructural fue el del Frente Nacional, para lo cual se acudió, entre otras maniobras, a revivir dos mitos clásicos de la llamada "democracia colombiana", que es tan especial en el conjunto latinoamericano. Estos dos mitos, resucitados de manera emotiva en 1957, fueron el del santanderismo de nuestro "país de leyes" que no tolera dictaduras; y el de la "Atenas suramericana" como fuente de ideales griegos de democracia, que en ese momento los personificaban las élites bogotanas de los dos partidos tradicionales. Otros intentos de acomodación de escombros han sido las proclamas cuatrianuales de planes de gobierno ("Las cuatro estrategias", etc.). El último esfuerzo notable fue la expedición de la Constitución de 1991 y la proclamación de la "democracia participativa" (¿otro mito?) como su columna dorsal. Son, pues, recursos parecidos a salvavidas colectivos que se han lanzado y empleado de manera táctica cuando se han necesitado por grupos dominantes. Vamos a reinterpretarlos cortamente.

El Frente Nacional fue un intento de acomodación ante el derrumbe de las instituciones agrietadas, representadas por las dictaduras sucesivas de Laureano Gómez y Rojas Pinilla. Tal fue el segundo gran nadir del proceso de Violencia. Con las medidas tomadas por el bipartidismo tradicional, se quiso evitar el colapso del Estado o su transformación en autocrático y

fascistoide. Pero el arreglo de las rocas y cantos rodados en aquellos años no fue suficiente, porque los mismos políticos que habían hecho de aprendices de brujo con la primera Violencia se resistieron a efectuar las necesarias reformas político-económicas de fondo.

La agraria, la administrativa, la desarrollista y la territorial son de las reformas frustradas más importantes. De la agraria se siguió alimentando la guerrilla rural, como viene dicho. Por la administrativa, se cayó en la corrupción y el peculado. Por el desarrollismo imitativo e impuesto desde fuera, se crearon graves desequilibrios económicos regionales. En lo territorial se dejó incólume la estructura gamonalesca y se toleraron críticos vacíos de poder local que llenaron las guerrillas.

Estas frustraciones han venido haciendo colusión para estallar en las sucesivas crisis de los gobiernos de López Michelsen (paro de 1977), Turbay Ayala (guerrilla M19), Betancur (Palacio de Justicia), Barco y Gaviria (narco-terrorismo) y Samper (guerrillas de ocupación territorial) e impedir el afianzamiento real de una democracia auténtica en nuestro país.

Como lo sugerí antes, es curioso que los colombianos hayamos tenido la sensación de ir descendiendo cada vez más profundo por estas grietas cuatrienales, pero sin ahogarnos del todo ni llegar a una guerra civil formal. Tal sensación cíclica de ahorcamientos periódicos sigue acompañándonos hasta hoy en el llamado Proceso 8000, que de nuevo produce cismas a varios niveles, llegando a crear antiélites en grupos dominantes, lo cual debe tener, como antes, serias consecuencias estructurales.

Lo singular, pues, es que el país no se haya desintegrado formalmente, como lo han venido profetizando las *Casandras* de turno. Pero el Estado colombiano sí ha sufrido un colapso con las impresionantes ocupaciones de las guerrillas en una gran porción del territorio nacional, ante la incapacidad de respuesta de las instituciones oficiales y de la Fuerza Pública.

El "aguante" -este margen de acumulación y asimilación simultáneas de crisis- puede explicarse en buena parte por la voluntad de supervivencia del país señalada atrás, y también por la estructura social más densa del país. Esta se ha vuelto a la vez más compleja y más flexible por la transición a lo moderno empezada en los

años 30. Los derrumbes sucesivos parece que encuentran ahora mayor espacio de acomodación en las hendijas de las instituciones que reciben los remezones. Así, las instituciones desbarrancadas se han ido nivelando, reparando y resistiendo por factores como los siguientes:

1. Cambios rápidos de una opinión tolerante, en buena parte manipulable. Es uno de los contrastes más impresionantes con la situación de intolerancia sectaria y dogmática que encontramos en 1962. Una educación popular y secular mucho más extendida puede ser factor interviniente.

2. Variaciones de cosmovisión. Se observan mayores y más frecuentes impactos del mundo exterior sobre las comunidades colombianas, que llevan a revisar el *statu quo* con ojos críticos y con mayor entendimiento de los procesos de cambio.

3. Aceleración del progreso económico. Producida por la explotación capitalista intensiva y sus modalidades de acumulación, que han destruido en el campo la pequeña y mediana propiedad y las formas señoriales y de aparcería y que han alimentado el sector terciario en las ciudades.

4. Crecimiento de la población urbana. Aunque las definiciones del censo incluyan muchos poblamientos rurales como urbanos por razón de números, el estrecho ethos rural antes predominante se halla en retirada.

5. Quiebre del aislamiento geográfico regional. La red nacional de comunicaciones se ha tupido de manera impresionante, con múltiples efectos sobre estructuras y costumbres, aunque afectada por la ocupación territorial guerrillera.

6. Ampliación de la frontera agrícola y de colonización. Tal como ocurrió con las colonizaciones clásicas del siglo pasado (la antioqueña, la cundiboyacense, la costeña) que sirvieron como escapes de las guerras civiles, así ha ocurrido también con las de la época de la Violencia: son refugios ante persecuciones e injusticias de los centros históricos, así se lleven consigo tensiones familiares y conflictos comunales del pasado.

Ha habido, pues, más aire para jugar a los ajustes que cada derrumbe ha requerido, y así los gobernates han logrado defender la integración del país -que no la del Estado-, por una parte, y la identidad de la nación en el contexto mundial, por otra. Pero las grietas

principales advertidas en 1962 con la impunidad, la falta de tierras y la pobreza de las mayorías siguen mostrando su amenazante realidad.

EL CEMENTO DE LA CONSTITUCION DE 1991

Como viene dicho, el último gran ajuste necesario por los fracasos anteriores en las reparaciones de las grietas, ha sido el de la Constitución de 1991. Producto de una elación de esperanzas colectivas, especialmente juveniles, se quería que la nueva Carta detuviera con su nuevo cemento la progresiva corrosión sociopolítica. Hubo un momento cuando se vio que ésta podía empezar a detenerse, cuando la Asamblea Nacional Constituyente ordenó el cierre del Congreso. Se vislumbró entonces una Colombia original, tolerante y pluralista, donde se podían acomodar desde las etnias hasta las guerrillas (cuatro de ellas entregaron sus armas).

Que el país así lo ansiaba y estaba listo a reestructurarse, lo demuestra la rapidez y consistencia con las que quedó redactado el texto constitucional. Aunque con naturales errores, el valor de la nueva Carta radica en las innovaciones sociopolíticas que quiso impulsar, tales como los mecanismos de participación popular, el mandato de la descentralización y la regionalización, una justicia eficaz, la autonomía del Banco de la República y los derechos civiles, todo lo cual tiene trazas de persistir.

Entre tales innovaciones, se destaca la de la participación popular. Se deriva ésta a su vez de una concepción ideológica pluralista (étnica y cultural) que venía de atrás, desde las luchas del Frente Unido del Padre Camilo Torres (1965). Muchos consideramos que estas tesis participativas están en la esencia de la Constitución. Allí quedó consagrado el principio general de la "democracia participativa" con el que se pretende superar los defectos seculares de la "democracia representativa", la que organizó el Estado desde la independencia de España.

Es posible que esta transición ideológico-valorativa siga avanzando en nuestros días, a juzgar por los efectos que la Carta de 1991 ha tenido ya sobre la conducta de dirigentes y el más cuidadoso desempeño de instituciones administrativas. Las amenazas de fiscalización popular, revocatoria de mandatos, defensa de derechos humanos, consultas populares,

plebiscitos y referendos, autorizados por la Ley 134 de 1994, pueden dar un vuelco grande a las formas de hacer política en Colombia.

Si ello realmente ocurre y se sigue desarrollando la Constitución, se podrá ver por fin en Colombia el cierre de algunas grietas profundas y la detención de sucesivos desplomes estructurales. La simultánea o consecuente corrosión institucional puede estarse deteniendo también, para dar origen a nuevas construcciones políticas, sociales y éticas, aunque el proceso siga siendo largo, duro y peligroso. Para ello, la contribución de la idea-fuerza de la participación popular seguirá siendo crucial.

GENESIS Y EXTENSION DEL CONCEPTO DE PARTICIPACION POPULAR EN COLOMBIA

Gracias a los trabajos de Carole Pateman, conocemos hoy mejor el derrotero del concepto de *participación* desde Rousseau, quien lo colocó más allá del uso simplemente literario¹⁵¹. Resucitó este concepto durante la segunda post-guerra, ligado primero a la "revolución de las expectativas" y más adelante al fracaso del desarrollismo económico. Se trajo a Colombia durante los años 70 aunque, como veremos, de manera marginal.

Según parece, el sentido político que se le empezó a dar a la idea de *participación* entre nosotros nació en el Cono Sur del continente, por la curiosa simbiosis brasileño-chilena que ocurrió con la diáspora de las izquierdas cariocas, a partir del golpe contra el Presidente Joao Goulart. Educadores populares como Paulo Freire -quien empezó en esa época a hacer circular clandestinamente su *Pedagogía del oprimido*- y sociólogos como Ruth Corrêa Leite y Fernando Henrique Cardoso, hicieron migas con colegas de Santiago, creando una corriente de opinión con influencia entre socialistas y demócratas cristianos estilo Jacques Chonchol.

Una primera versión participativa apareció con la Consejería Nacional de Promoción Popular del Presidente Eduardo Frei y, en el ámbito rural, con la fundación del Instituto Chileno de Investigación para la Reforma Agraria (ICIRA). A este instituto llegó el sociólogo inglés Andrew

Pearse, fresco de su experiencia comunal colombiana en la Universidad Nacional (Facultad de Sociología), quien elaboró allí el concepto de participación campesina. Más adelante, a Pearse se debió también la fundación del influyente programa de participación del Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) en Ginebra.

Estas semillas dieron fruto con el advenimiento al poder de la Unidad Popular de Salvador Allende, en cuyo gobierno cristalizaron políticas claras de participación popular más allá del acto electoral. Se estableció la Consejería Nacional de Desarrollo Social, uno de cuyos fines era la "creación de mecanismos de participación y control del aparato del Estado por parte de la clase trabajadora". En esta Consejería trabajó por un tiempo el politólogo norteamericano Paul Oquist, autor de un interesante libro sobre el colapso del Estado y la violencia en Colombia, quien terminaría en los años 80 asociado a la Revolución Sandinista.

Oquist, a su regreso a la Universidad de los Andes en Bogotá, trajo de Chile el mensaje de la participación popular, y lo sembró en el Departamento de Ciencia Política. También lo hizo en otros círculos bogotanos, como la Fundación para la Nueva Democracia, coordinada por Ciro Alfonso Ruiz, entidad de tendencias democristianas inspiradas en tesis del Concilio Vaticano II. Esta fundación organizó en abril de 1973 un seminario sobre "Colombia hacia una sociedad participante", en el que expusieron ideas Oquist y dirigentes como Alberto Mendoza Morales y Diego Uribe Vargas, futuro Constituyente de 1991. Las conclusiones de este seminario, recogidas en un libro así titulado, hicieron eco a las políticas de participación ensayadas por el gobierno de la Unidad Popular¹⁴⁴¹.

Con la caída de Allende y por el arraigado triunfalismo del bipartidismo colombiano, es comprensible que este libro no hubiera tenido mucha resonancia. Pero la idea de participación popular siguió su curso en otros contextos y trabajos de campo. Reapareció cuatro años más tarde en el "Primer Simposio Mundial de Investigación-Acción" en Cartagena en abril de

¹⁵¹ Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge University Press, 1970.

¹⁴⁴¹ Fundación para la Nueva Democracia, *Colombia hacia una sociedad participante*, Bogotá, noviembre 1973.

1977. Allí, con la presencia de Oquist, esta vez como epistemólogo de tan novedosa metodología, y preocupados por la pírrica represión del movimiento campesino, los asistentes escuchamos, entre otros, los planteamientos de Budd Hall, educador popular canadiense y seguidor de Freire, quien había conocido también las experiencias aldeanas ("uyamaa") de Julius Nyerere en Tanzania. Hall vinculó la investigación-acción a la idea de participación popular, dando origen a la sigla hoy en boga universal de la IAP¹⁵.

Los movimientos políticos independientes de naturaleza regional que se organizaron en Colombia durante la década de los 80 tomaron fácilmente, como una de sus consignas, la de la participación popular. También recuperaron los ideales de pluralismo político y cultural planteados por Camilo Torres, como ya se mencionó¹⁶.

No hay duda de que los movimientos regionales fueron un mecanismo de multiplicación importante de la idea participativa en Colombia. Otras agrupaciones, como las convocadas por los socialistas Antonio García y Gerardo Molina, se reunieron para organizarse políticamente según estos lineamientos. Una de ellas, el Movimiento Firmes, alcanzó a tener presencia nacional. Sus ideas quedaron consignadas en el folleto publicado por la Fundación Antonio García en octubre de 1982, en el que ya se pedía claramente "un nuevo pacto social y político" en Colombia, inspirado en el pluralismo y la participación popular¹⁷. Mientras tanto, los políticos liberales y conservadores, con la posible excepción del movimiento Poder Popular de Ernesto Samper, ignoraron estos desarrollos.

El grupo detrás de la Fundación Antonio García, basado en el Tolima, logró trascender su acción con una serie de encuentros nacionales, de los que surgió eventualmente el movimiento coordinado de los regionales, llamado "Colombia

Unida"¹⁸. Allí y en los eventos preparatorios hicieron sus primeras armas políticas dirigentes promisorios como Francisco de Roux, Ernesto Parra, Francisco Leal Buitrago, Ricardo Mosquera, María Cristina Salazar, Pedro Santana, Eduardo Medina, Camilo González, Gustavo Gallón, Javier Giraldo y Carlos H. Urán.

A Carlos Urán -magistrado adjunto de la Corte Suprema de Justicia que murió en la toma del palacio en 1985-, se debe la primera especificación conocida del concepto de "democracia participativa" en Colombia, como aparece en el editorial del Boletín del Movimiento Popular, *Correo MP* de marzo de 1984. Este Boletín se publicaba como vocero de las nuevas fuerzas políticas. Todavía friamente recibida por las élites del poder, la idea fue poco a poco retomada por periodistas influyentes como Alfredo Vásquez Carrizosa y Jorge Child.

Mientras tanto, el Movimiento Colombia Unida hizo su más importante concentración nacional, con 67 movimientos de 18 departamentos, el 10 y 11 de diciembre de 1988. Allí, en su plataforma ya aparecieron formalmente como exigencias políticas la "democracia participativa" y una nueva Constitución Nacional apelando al constituyente primario¹⁹. Esta convención adoptó igualmente los conocidos principios prácticos de trabajar de las bases hacia arriba y de la periferia al centro, que son reglas universales de la participación popular.

Absorbida más adelante Colombia Unida por la Alianza Democrática M19, el reto de la apelación al constituyente primario fue enarbolado por la juventud universitaria con el Movimiento de la Séptima Papeleta. Como se recordará, éste buscaba pasar por encima de los obstáculos formales de la Constitución vigente para llegar a otra con más amplios márgenes de actividad ciudadana.

Los esfuerzos de esta campaña, sumados a los de la AD-M19, hicieron abrir por fin los ojos de dirigentes liberales y conservadores. Sus

¹⁵ Simposio Mundial de Cartagena, *Crítica y política en ciencias sociales*, Bogotá, 1978, Tomo II, pp. 395-414.

¹⁶ Jairo Chaparro, "Los movimientos políticos regionales, un aporte para la unidad nacional, en Gustavo Gallón ed., *Entre movimientos y caudillos*, Bogotá, CINEP-CEREC, 1989, pp. 208-226.

¹⁷ Orlando Fals Borda, *El socialismo que queremos: un nuevo pacto social y político en Colombia*, Bogotá, Fundación Antonio García, octubre 1982.

¹⁸ Fundación Antonio García, *En defensa de la democracia*, Bogotá, febrero 1983.

¹⁹ Colombia Unida, *Bases para la construcción de la AD-M19*, Bogotá, septiembre 1990, p. 24.

delegatarios, al llegar a la Asamblea Nacional Constituyente en febrero de 1991, estuvieron de acuerdo en proclamar a la "democracia participativa" como una de las bases de la nueva Carta. Se entendió como un destello salvador de la nacionalidad amenazada, como una salida adecuada para los maltrechos aparatos estatales de la democracia colombiana, es decir, como otro salvavidas colectivo. Se pretendía cerrar así, una vez más, dos de las grietas políticas más grandes y antiguas de la nación: la político-administrativa y la de la Violencia rural-urbana.

AVANCES Y PELIGROS ACTUALES DE LA PARTICIPACION

Hemos visto cómo, para reparar las grietas estructurales contemporáneas de Colombia, la idea de participación popular se fue formando de muy diversas fuentes durante los últimos treinta años y de manera casi espontánea, es decir, sin planeación consciente. Fue saltando casi al azar, buscando medios favorables con personas y grupos receptivos, desde el Concilio Vaticano y Tanzania, con la democracia cristiana chilena, la educación popular brasilera, las escuelas de politología colombiana, los intelectuales marxistas y comprometidos de la IAP, los movimientos regionales y la protesta estudiantil. Fueron como riachuelos ideológicos que, al confluir eventualmente, hicieron posible el torrente de la democracia participativa que desembocó en la Constitución de 1991.

Las tesis originales provenientes de Chile y de las reuniones de intelectuales preocupados durante los años 70, definían a la democracia participativa como democracia directa, pluralista y federativa, con algunas trazas de anarquismo filosófico. Pero la definición aceptada luego por la IAP entendió a la participación como un rompimiento de relaciones de subordinación, dependencia, explotación y opresión establecidas entre sujetos y objetos, con el fin de construir en cambio relaciones simétricas u horizontales entre ellos.

Como este purismo conceptual es inalcanzable en la práctica, las tesis sobre participación popular acogidas en la Constitución de 1991, aunque bien intencionadas, quedaron teóricamente cortas. El desarrollo de ellas, contenido en la Ley 134, es todavía peor, porque los congresistas aprovecharon para imponer reglas duras y

complicadas que limitan el derecho de fiscalización e intervención de los ciudadanos sobre los gobiernos. La miopía individualista de la clase política primó otra vez sobre los intereses generales.

Sin embargo, el tono de los gobiernos ha cambiado desde entonces en Colombia. Se ha avanzado más allá de aquella vieja limitación del concepto participativo como simple presencia en las urnas electorales. Se han hecho ya suficientes reparos a la sesgada definición de Samuel Huntington que reducía la participación a la manipulación popular para apoyar políticas gubernamentales. No se está más de acuerdo con aquellos politólogos como Richard Dahl que veían peligros irracionales para el sistema con la participación de masas ignoras y plebeyas; o con economistas como Joseph Schumpeter que reconocía a los pueblos sólo el derecho de votación porque en otra forma no harían sino estampidas. Aquella meta de fomentar la estabilidad en sistemas sociales disminuyendo la participación de la gente, como quería Bernard Berelson, ahora se ve como algo retrógrado.

Además, simultáneamente se ha confirmado el peligro suicida del desarrollismo económico con imitación de modelos extraños a nuestras culturas, y se ha procedido a la cooptación del concepto de participación por gobiernos y ONGs, como alternativa factible. Ahora estas ideas, antes medio heréticas, se han vuelto de moda, asimiladas por las agencias de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Sobre esta cooptación por agencias multilaterales hay polémica. Muchos sostienen que es sólo de labios para afuera, y que su espíritu sigue siendo el frío neoliberalismo privatizante que continúan pagando las clases pobres del mundo. Peligroso derrotero para todos.

Una necesidad actual de clarificación y avance radica en entender mejor las formas de representación que, de una u otra manera, subsisten en los mecanismos de participación popular, en vista de lo impracticable de la democracia directa. Pero si no es posible el gobierno directo de las mayorías, si lo práctico se reduce a la acción de determinados dirigentes -incluyendo aquellos esclarecidos por la experiencia participativa-, es probable que en Colombia sigan medrando todavía, por un buen tiempo, las malas mañas autocráticas,

gamonalescas o corruptas de los políticos tradicionales y aún de los nuevos. O que se siga ciegamente insistiendo en las engañosas políticas desarrollistas conocidas.

La organización popular en terceras fuerzas, i.e., más allá del bipartidismo, todavía no se ve firme, aunque se perfila como más fácil de construir que antes. Figuras alternativas que se han inspirado en doctrinas participativas han alcanzado el poder local; y muchos alcaldes responden ya a estas nuevas ideas-fuerza.

Queda pendiente en Colombia la renovación de las ramas ejecutiva y legislativa del poder público y el cambio profundo de las costumbres políticas. La Asamblea Nacional Constituyente estuvo a punto de alcanzar ese momento de no retorno político. Hoy se percibe como un grave error el no haber completado aquel ciclo de

cambio, por lo que subsisten aún grietas ancestrales y se ha hecho más lenta la transición hacia la nueva institucionalidad. Por eso continúa la deletérea corrosión de estructuras que los teóricos han percibido. Pero, de nuevo, ¿hasta cuándo?

Democracia y participación: he aquí dos metas valiosas por alcanzar en Colombia, que siguen apareciendo como alternativas al *maldesarrollo* imitativo hasta ahora ejecutado por los gobiernos. Son acicates para una mejor acción política y para la disolución de la escamosa Violencia. Las esperanzas populares de una transformación radical autogenerada no se han perdido en el país. Es casi un milagro. Si no fuera así, uno no se explicaría cómo nuestro cuerpo social ha aguantado tantos derrumbes y agrietamientos sucesivos en la estructura nacional, desde hace medio siglo.

